

Kast aterrizaja en Biobío con plan de reconstrucción y abre debate por impuestos, gratuidad y CAE

El Presidente José Antonio Kast se trasladó este sábado a la Región del Biobío para reunirse con damnificados por los incendios forestales y recorrer una de las zonas más golpeadas por la emergencia, instalando desde terreno uno de los anuncios políticos más relevantes de sus primeros días de mandato. La actividad se desarrolló en Lirquén, comuna de Penco, donde el Mandatario presentó un borrador del proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional", iniciativa con más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes y que el Ejecutivo busca convertir en una de sus primeras apuestas legislativas.

En su intervención, Kast vinculó la tragedia de los incendios con una lectura más amplia del estado del país, planteando que la reconstrucción debía entenderse no solo en términos materiales, sino también económicos, institucionales y sociales. Según el detalle entregado por el gobierno y recogido por medios nacionales, el plan considera cinco pilares: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional, reconstrucción fiscal y reconstrucción del orden legal y de la seguridad pública.

En materia de reconstrucción física, el Ejecutivo anunció la ampliación y

extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para incendios, junto con una inyección adicional de 400 mil millones de pesos para la atención de las zonas afectadas. El proyecto también contempla medidas complementarias como una rebaja transitoria del impuesto a las donaciones y facultades para la Tesorería en materia de condonación de capital adeudado, buscando acelerar la respuesta estatal frente a la pérdida de viviendas y la urgencia de recuperación en sectores siniestrados.

El eje económico fue uno de los que más atención concentró, tanto por su alcance como por su evidente carga política. Kast anunció una rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, subsidios para proteger el empleo formal y una agilización de permisos ambientales y sectoriales. La justificación presidencial apuntó a reactivar la inversión y acelerar la recuperación, aunque varios de estos anuncios ya comenzaron a dividirse en el Congreso.

En el plano institucional, el proyecto incorpora una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,



con la promesa de reducir incertidumbre y acelerar tramitaciones, además de agilizar concesiones marítimas y establecer mecanismos de reembolso cuando el propio Estado anula resoluciones previamente otorgadas. Kast también sostuvo que la reforma ambiental se inspira en la idea de que "la persona está primero", una definición que anticipa una discusión de fondo sobre el equilibrio entre inversión, reconstrucción y resguardo regulatorio.

Pero fue en el componente fiscal donde el anuncio mostró su costado más polémico. El gobierno propuso limitar la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años, frenar su extensión a nuevos deciles,

establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema y fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado, CAE. El propio Mandatario reconoció que al inicio de su administración deberá tomar "medidas impopulares", dejando en claro que la reconstrucción que plantea no se restringe a la emergencia de Biobío, sino que busca empujar una redefinición más amplia de las prioridades del gasto público.

El último eje del plan se enfoca en orden legal y seguridad pública, incluyendo medidas de protección frente a usura y crédito informal, endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos y sanciones más

duras al transporte ilegal de migrantes. Con ello, el Presidente vuelve a enlazar reconstrucción, seguridad y control estatal como parte de una misma narrativa de arranque de gobierno, algo que ya había quedado instalado con sus primeros decretos sobre frontera norte.

Las reacciones políticas no tardaron. Mientras parlamentarios del oficialismo y sectores afines valoraron el despliegue presidencial en la zona afectada y defendieron el plan como una respuesta integral frente a la magnitud de la crisis, desde la oposición surgieron críticas directas por el contenido del proyecto, especialmente por la rebaja de impuestos a empresas y los cambios anunciados a la gratuidad universitaria. La discusión, por lo tanto, ya quedó instalada no solo como un debate sobre reconstrucción post incendio, sino también como un pulso ideológico sobre el modelo económico y social que el nuevo gobierno quiere comenzar a imprimir desde su primera semana.

Para una región como Tarapacá, el anuncio también merece una lectura política más amplia. Lo ocurrido en Penco no fue solo una visita a damnificados ni un gesto de empatía territorial. Fue, en los hechos,

una puesta en escena del tipo de gobierno que Kast quiere proyectar: uno que toma una catástrofe real, la convierte en plataforma de definiciones estructurales y la enlaza con una agenda de reactivación, ajuste fiscal y seguridad. La pregunta de fondo será si esa mezcla logra respaldo social y político suficiente o si termina abriendo un frente de controversia demasiado amplio en medio de una emergencia que exige respuestas rápidas y concretas.

Porque ayudar a los damnificados del Biobío parece una urgencia indiscutible. Pero usar esa misma urgencia para empujar una batería de reformas tributarias, educacionales e institucionales de alto impacto cambia el eje del debate. Y ahí está el verdadero nudo político del anuncio presidencial: la reconstrucción puede ser una necesidad nacional, pero también puede transformarse en el vehículo de una agenda que, más que unir al país tras la tragedia, lo empuje de inmediato a una discusión ideológica de gran escala. En un diario local, esa diferencia importa. Porque una cosa es reconstruir lo que el fuego destruyó; otra, muy distinta, es aprovechar las cenizas para redibujar todo el mapa político del país.